

Expediente: 1581/24

Carátula: LOPEZ ZENTENO RAMONA ANTONIA C/ BANCO SUPERVILLE S.A. S/ AMPARO INFORMATIVO / HABEAS DATA

Unidad Judicial: OFICINA DE GESTIÓN ASOCIADA CIVIL Y COMERCIAL N° 3

Tipo Actuación: FONDO CON FD

Fecha Depósito: 28/05/2024 - 00:00

Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:

27341338196 - LOPEZ ZENTENO, RAMONA ANTONIA-ACTOR/A

90000000000 - BANCO SUPERVIELLE S.A, -DEMANDADO/A

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

Oficina de Gestión Asociada Civil y Comercial N° 3

ACTUACIONES N°: 1581/24



H102334969479

JUICIO:LOPEZ ZENTENO RAMONA ANTONIA c/ BANCO SUPERVILLE S.A. s/ AMPARO INFORMATIVO / HABEAS DATA EXPTE N° 1581/24.

San Miguel de Tucumán, 27 de mayo de 2024

AUTOS Y VISTOS: los presentes autos: LOPEZ ZENTENO RAMONA ANTONIA c/ BANCO SUPERVILLE S.A. s/ AMPARO INFORMATIVO / HABEAS DATA, de los que

RESULTA

I. Que, mediante presentación digital de fecha 09/04/2024, se presenta, la Sra. Ramon Antonia Lopez Zenteno, DNI N°14.226.013, con domicilio real en Av. Principal S/N Fte. Barrio 11 Viviendas, El Bracho- Cruz Alta- Tucumán, e interponer acción de amparo informativo (Habeas Data), conforme art. 43 de la Constitución Nacional, art. 39 de la Constitución Provincial de Tucumán, art. 67 del Código Procesal Constitucional de Tucumán y arts. 4, 16 y cctes. de la ley 25.326, en contra de Banco Supervielle S.A, con domicilio en San Martín n° 829 de esta ciudad, a fin de que la demandada remita la totalidad de los datos que sobre su persona que se encuentren almacenados en sus archivos, y que sean exhibidos y entregados en la forma que se disponga, en particular: si se encuentra registrada como deudora y en su caso, de que obligaciones; si los datos fueron objeto de cesión de terceros; que productos y servicios figuran dados de alta o contratados a su nombre.

Reclama que para el supuesto de constatarse errores o inexactitudes, se proceda a la pertinente rectificación y/o supresión, con expresa imposición de costas a la demandada.

Manifiesta que, en virtud de un rechazo sobre una oferta de licitación de un automóvil objeto de un plan de ahorros suscripto por ella, tomó conocimiento que me encontraba afectada en el Banco Central de la República Argentina, por la demandada Banco Supervielle S.A., pese que nunca tuvo ninguna relación con la demandada.

Que pese a ello, según la página web del Banco Central de la República Argentina (www.bcra.gov.ar), se encuentra informada por la demandada, en la base central de deudores en los períodos 11/22, 12/22 y 01/23 en situación 3 ("con problemas"); los períodos 02/23, 03/23 y 04/23 en situación 4 (con alto riesgo de insolvencia), y los períodos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del año 2023 en situación 1.

Expone que dando cumplimiento con lo dispuesto por la ley 25.326, en fecha 28/02/2024 remitió a la demandada la CD N°:934041180, la que fue recepcionada en fecha 29/02/2024, ello a los efectos de que la demandada arbitre los medios para suprimir la información falsa que le proporcionó al BCRA, reclamando además que se le informe el motivo por el cual fue informada como deudora, e intimando a fin de poder acceder a la documentación en la que se funda la supuesta deuda.

Recuerda que sobre dicha intimación, la demandada no dio ningún tipo de respuesta a lo solicitado en la Carta Documento, por lo que se ve obligada a iniciar el presente amparo informativo. Acompaña prueba documental y ofrece prueba informativa.

II. Corrido traslado de la demanda, en fecha 20/05/2024 se tiene a la demandada por incontestada la demanda y por no producido el informe del art. 21 del CPCTuc.

Por decreto de igual fecha (20/05/2024), pasan los autos para el dictado de sentencia definitiva

CONSIDERANDO:

I. Que, mediante presentación digital de fecha 09/04/2024, se presenta, la Sra. Ramon Antonia Lopez Zenteno, e interponer acción de amparo informativo (Habeas Data), en contra de Banco Supervielle S.A, a fin de que la demandada remita la totalidad de los datos que sobre su persona que se encuentren almacenados en sus archivos, y que sean exhibidos y entregados en la forma que se disponga, en particular: si se encuentra registrada como deudora y en su caso, de que obligaciones; si los datos fueron objeto de cesión de terceros; que productos y servicios figuran dados de alta o contratados a su nombre.

En esa misma oportunidad reclama que para el supuesto de constatarse errores o inexactitudes, se proceda a la pertinente rectificación y/o supresión, con expresa imposición de costas a la demandada.

Corrido el traslado de la demanda de conformidad al art. 59 del CPCT, para que conteste demanda y al mismo tiempo produzca el informe del art. 21 del CPCT, la demandada dejó vencer el plazo sin dar cumplimiento

II. Es oportuno dejar establecido lo que se entiende por Habeas Data; esta acción fue acogida por nuestra Constitución Nacional y constituye un remedio urgente para exigir el acceso y conocimiento, y en su caso, la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de datos que consten en registros o bancos de datos públicos o privados, siempre y cuando estos sean erróneos, y existiera arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta de parte de estos establecimientos.

El Habeas Data busca la protección de manera inmediata, de una diversidad de derechos (a la verdad, a la autodeterminación informativa, a la intimidad, a la privacidad, a la voz, a la imagen, a los valores familiares, al honor, al patrimonio, entre otros).

Ahora bien, entrando a valorar la cuestión de fondo, veamos lo que establece el Art. 43 de la Constitución Nacional: "Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades

públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.”.

La Ley de Protección de Datos Personales N°25.326, establece en su artículo 14 el derecho de acceso a la información, Inc. 1) “El titular de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales incluidos en los bancos de datos públicos, o privados destinados a proveer informes”. Inc. 2: “El responsable o usuario debe proporcionar la información solicitada dentro de los diez días corridos de haber sido intimado fehacientemente”.

Del texto de la demanda surge con claridad que lo pretendido por la actora, es poder tener acceso de manera cierta, fehaciente, completa y genuina a la información que sobre ella tiene la demandada y que en su caso dio origen el informe en la base de datos de deudores.

Al interponer su demanda, adjuntó la carta documento CD N°:934041180, de fecha 28/02/2024, recepcionada por la demandada en fecha 29/02/2024, a cuyo texto me remito en honor a la brevedad.

De las constancias de autos surge que, la demandada pese a estar fue debidamente notificada en fecha 09/05/2024, a fin de presentar el informe circunstanciado previsto por el art. 21 del CPCT, dejó vencer el plazo sin presentar el uniforme ni contestar la demanda.

En consecuencia, la falta de presentación del informe del art. 21, como de la contestación de demanda, permite tener por cierto los hechos expuestos por la actora.

Pese a tal facultad, considero oportuno dejar sentado que conforme la prueba documental aportada por la parte actora, en especial la carta documento de fecha 28/02/2024 con su respectivo resultado de movimiento, corresponde tener por acreditado que dicha misiva fue remitida y entregada a la demandada en fecha 29/02/2024, y por consiguiente, por cumplido el respectivo requerimiento extrajudicial previsto por la ley N°25.326 a fin de obtener la habilitación de la vía.

Ahora bien, del Informe del sistema de consultas emitido por la página web del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que adjunto la parte actora como prueba instrumental, corresponde tener por cierto que el Banco Supervielle informó que la actora registra una situación 3 para el periodo 11, 12/2022 y 01/2023 y situación 4 para el periodo 02, 03 y 04/2023.

A mayor abundamiento, debo decir que según surge de la página de la base de deudores del Banco Central de la República Argentina, la cual es de libre acceso, se encuentra debidamente corroborado que efectivamente la Sra. Lopez Zenteno, se encontraba informada por la demandada en situación 3 para el periodo 11, 12/2022 y 01/2023, y situación 4 para el periodo 02, 03 y 04/2023.

Sentado esto, cabe aclarar que en casos como el de autos, es decir cuando la demandada no presenta el informe circunstanciado, el juez puede tener por ciertos los hechos expuestos por la parte actora, si esto fuera conforme a derecho.

Esto encuentra fundamento en el principio pro homine, el que debe ser aplicado con un criterio hermenéutico desde la perspectiva de los derechos humanos, acudiendo a la norma e interpretación

más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos. Este principio coincide con el riesgo fundamental del derecho de los Derechos Humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre.

De tal modo que frente a la falta de presentación del informe circunstanciado del art. 21 del CPCT, como también a la incontestación de la contestación de la demanda, que analizada y valorada en relación con la prueba documental acompañada por la parte actora, en particular la falta de respuesta al requerimiento realizado mediante la carta documento, sumado a lo anterior, debe ser considerado como una conducta obstructiva e incumplimiento de su deber de información y de colaboración para desentrañar la verdad materia.

En tal sentido, la demandada tuvo varias oportunidades para aportar información y documentación que avale su información respecto de la actora, y no lo hizo.

La Ley N° 25.326 establece, en su artículo 14, el derecho de acceso, Inc. 1) “El titular de los datos, previa acreditación de su identidad tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales incluidos en los bancos de datos públicos, o privados destinados a proveer informes”. Inc. 2: “El responsable o usuario debe proporcionar la información solicitada dentro de los diez días corridos de haber sido intimado fehacientemente”. Asimismo, el art. 15 de la presente, sobre el contenido de la información, establece en su inc. 1: “La información debe ser suministrada en forma clara, exenta de codificación y en su caso acompañada de una explicación, en lenguaje accesible al conocimiento medio de la población, de los términos que se utilicen”. Inc. 2: La información debe ser amplia y versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento sólo comprenda un aspecto de los datos personales”.

En el presente caso, la afectada promovió la acción de habeas data con la finalidad de tomar conocimiento del origen del registro o informe como deudora por parte del Banco Supervielle SA., reclamando tener acceso a esas constancias y para que se proceda a la pertinente rectificación y/o supresión de esa información.

Teniendo en cuenta la prueba documentación acompañada por la parte actora, en especial la carta documento CD N°:934041180, remitida por la actora en fecha 28/02/2024, la que fue recepcionada por el Banco Supervielle SA en fecha 29/02/2024, y que no fuera respondida, surge claramente probado que pese a sus esfuerzos extrajudiciales y judiciales, no ha podido satisfacer su interés y derecho a conocer y acceder a la información de los términos contractuales que precisa en su escrito de demanda, de una manera cierta, completa y genuina.

Finalmente recordemos que la demandada no informó circunstanciadamente, tampoco acompañó el o los contratos que hubiera celebrado con la actora a fin de conocer de ese modo, a fin de conocer si la información elevada por la demanda al Banco Central se presenta como un acto legítimo y no arbitrario por parte de ella.

La demanda de habeas data resulta así admisible; por consiguiente, se condena a Banco Supervielle S.A., a que dentro de los diez (10) días de quedar firme la presente proceda a rectificar y suprimir la información erróneamente informada por la demandada al Banco Central de la República Argentina, respecto de situación 3 para el periodo 11, 12/2022 y 01/2023, y situación 4 para el periodo 02, 03 y 04/2023 y que fuera debiendo acreditar documentalmente las diligencias efectuadas a estos efectos.

III. Costas: se aplican a la parte demandada vencida, de acuerdo al resultado arribado en el proceso (Art. 26 CPCConstT).

IV. HONORARIOS: Siendo la etapa procesal pertinente, corresponde regular los honorarios al profesional interviniente (cfr. art. 20 Ley 5.480).

Al respecto, tengo en cuenta que en doctrina y jurisprudencia se admite que los procesos de amparo por su especial naturaleza, carecen de base económica, motivo por el cual a fin de determinar los emolumentos profesionales, he de considerar que la regulación de honorarios se debe efectuar en consideración a las pautas objetivas y subjetivas establecidas en el artículo 15 de la Ley 5.480, atendiendo a la vez a los elementos de juicio que obran en la causa, las etapas cumplidas y el resultado arribado (cfr. en tal sentido, CCCC, Sala II, Sentencia N° 613 de fecha 30/10/17).

Si bien el art. 38 de la Ley arancelaria local establece un piso, no puedo soslayar que de aplicarlo, este resultaría manifiestamente desproporcionado en función del valor económico de la ejecución llevada a cabo, el tiempo insumido y la labor efectivamente llevada a cabo por los letrados. Relacionado con esto, el art. 13 de la Ley N° 24.432 dispone que: “Los jueces deberán regular honorarios a los profesionales, peritos, síndicos, liquidadores y demás auxiliares de la justicia, por la labor desarrollada en procesos judiciales o arbitrales, sin atender a los montos o porcentuales mínimos establecidos en los regímenes arancelarios nacionales o locales que rijan su actividad, cuando la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes que se consideren, indicaren razonablemente que la aplicación estricta lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de corresponder. En tales casos, la resolución que así lo determine deberá indicar, bajo sanción de nulidad, el fundamento explícito y circunstanciado de las razones que justificaren la decisión.”

Es decir que los jueces tienen el deber de reajustar las sumas cuando de aplicarse los mínimos legales, puedan obtenerse resultados injustos o disvaliosos, y exista “una evidente e injustificada desproporción entre la tarea efectivamente cumplida y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de corresponder”.

Fue la Sala III, de la Excma. Cámara del fuero quien aplicó este razonamiento al establecer que: “En el caso, el valor vigente asignado a una consulta escrita al tiempo de la regulación ocasiona una evidente desproporción entre el escaso monto en juego en el proceso de ejecución de sentencia de los honorarios regulados, el tiempo insumido en el trámite de ejecución y las etapas cumplidas. De allí que la subsunción del caso por parte del A quo en el artículo 13 de la ley n° 24.432 resulta razonable y compartida por el Tribunal”. (DRES.: BEJAS - ACOSTA. Registro: 00049724-01. CCyC, Sala 3 en “Bertahalet Julio Cesar y Otra S/ Informacion Sumaria”, Sentencia N° del 02/08/2017).

En consecuencia, estimo prudente fijar los honorarios de la letrada DEBORATH MALERY RIZO, en un 50% del valor de una consulta escrita vigente al día de la fecha, conforme a lo dispuesto por el Colegio de Abogados de la Provincia de Tucumán.

Para la presente regulación, se considera su labor como patrocinante de la parte actora, por cuanto la letrada interviniente acreditó el carácter de apoderada luego de haber operado el vencimiento de la etapa probatoria (art 45 ley 5.480) y sin ningún trámite procesal pendiente.

Estimo que la suma resultante refleja con mayor proporcionalidad la naturaleza y envergadura de la tarea remunerada.

Por ello,

RESUELVO:

I) HACER LUGAR A LA ACCIÓN DE AMPARO (HABEAS DATA) deducida por la Sra. Ramon Antonia Lopez Zenteno, DNI N°14.226.013, en contra del Banco Supervielle SA. En consecuencia, se condena al demandado Banco Supervielle S.A., a que, en un plazo de diez días de quedar firme la presente proceda a adoptar todas las medidas necesarias para rectificar y suprimir toda información que registre el Banco Supervielle S.A. respecto de la Sra. Ramona Antonia Lopez Zenteno, DNI N°14.226.013, como deudora respecto de la situación 3 para el periodo 11, 12/2022 y 01/2023, y situación 4 para el periodo 02, 03 y 04/2023 de dicha entidad bancaria y del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.), que fue erróneamente informada por la demandada; debiendo acreditar documentalmente en este juzgado, las diligencias efectuadas a estos efectos.

II) COSTAS: se aplican a la parte demandada vencida, de acuerdo a los resultados arribados en el proceso (Art. 26 CPCT).

III) REGULAR HONORARIOS, por la actuación en autos, a la letrada DEBORATH MALERY RIZO, por su labor profesional, en la suma de \$175.000 (Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil)

HAGASE SABER.-1581/24CLÁ

DR. RAÚL EUGENIO MARTÍN TEJERIZO

JUEZ

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN

DE LA XIII° NOMINACIÓN

Actuación firmada en fecha 27/05/2024

Certificado digital:

CN=TEJERIZO Raul Eugenio Martin, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20217459770

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.